

Debilidades en la conducción política del proceso también facilitaron el golpe

Por Dick Parker*

E

l fugaz derrocamiento del presidente Chávez el 11 de abril fue consecuencia, entre otras cosas, de un marcado debilitamiento de su gobierno, sobre todo a partir del último trimestre del año pasado. ¿Cómo explicar este debilitamiento y su contracara —el fortalecimiento de una oposición que, hace apenas un año, lucía minoritaria, fragmentada y desorientada? Para ayudar a responder a este interrogante, proponemos examinar un aspecto del problema que los partidarios del proyecto suelen soslayar: la contribución de errores de conducción política por parte del mismo gobierno.

Empezamos por constatar que el proyecto nacional-popular¹, iniciado a partir de la convincente victoria electoral de diciembre de 1998, desafiaba explícitamente poderes e intereses hegemónicos a nivel nacional e internacional. La retórica anti-oligárquica y de rechazo al neoliberalismo había calado profundamente entre los sectores populares mayoritarios de la nación. Además, más allá de las fronteras, el proyecto suscitaba esperanzas de encontrar, a nivel continental, una alternativa a las políticas impuestas, desde hace tiempo, por las potencias centrales y los organismos financieros internacionales. Se trataba de una brecha que se había logrado abrir y que se proponía ensanchar, con plena conciencia de que los intereses hegemónicos afectados harían todo a su alcance para abortar el proyecto. Son las dimensiones del desafío asumido y la predecible reacción de los intereses potencialmente afectados lo que nos lleva a centrar el análisis en la estrategia política adoptada por el gobierno.

Era evidente, desde el comienzo, que las perspectivas de consolidación del proyecto estaban íntimamente vinculadas a su legitimidad democrática. Los cambios profundos que se proponía introducir serían utópicos si no se consolidaba el masivo apoyo popular logrado, canalizándolo a través de una institucionalidad democrática reconocida más allá de las



fronteras del país. Precisamente por eso, durante el primer año y medio del gobierno, la estrategia se dirigió prioritariamente a modificar el marco institucional a través de mecanismos electorales universalmente reconocidos como medulares para cualquier sistema democrático. Las sucesivas contiendas electorales que llevaron a la aprobación de una nueva Constitución y la posterior “relegitimación” de los poderes públicos tuvieron como propósito expreso “refundar la República” y establecer las bases de un marco institucional más propicio a la política de cambios propuesta. Sirvió, al mismo tiempo, para mantener en estado permanente de movilización a los sectores populares proclives al gobierno.

Paralelamente, el gobierno implementó una política económica diseñada para ampliar los recursos financieros disponibles, sin provocar un enfrentamiento con los organismos financieros internacionales: recuperación de los precios del petróleo a través del fortalecimiento de la OPEP; creación de un Fondo de Estabilización como colchón para eventuales caídas en los precios del crudo; una política doméstica centrada en una disminución de la inflación, lo que excluía la posibilidad de mejoras significativas, a corto plazo, en los ingresos reales de los sectores asalariados. Al mismo tiempo, se prefiguraban las prioridades del proyecto

*Profesor titular del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.

aumentando significativamente los recursos dedicados a los sectores salud y educación, revirtiendo así una tendencia que había caracterizado las dos décadas anteriores. También se implementó un Plan Social (Plan Bolívar) que involucraba a las Fuerzas Armadas en una campaña de ayuda a los sectores más pobres de la sociedad, concebida para atenuar los problemas más urgentes, mientras no se lograra sentar institucionalmente las soluciones propuestas en el proyecto.

Al año y medio de haber asumido el poder, el gobierno parecía haber consolidado un marco institucional propicio para la implementación de su programa, contando todavía con un nivel de apoyo popular poco común en la historia política venezolana. A esas alturas, un dirigente de uno de los barrios más populosos de Caracas pudo comentar que “este gobierno genera inquietud en la oligarquía más por lo que puede llegar a hacer que por lo hecho hasta ahora. Pero ellos, los poderosos, no lo quieren. De eso no tenemos dudas. Por eso, estamos firmes con él”². En efecto, a pesar de haber desplazado a la élite política tradicional y mantenido a raya el peligro de un descalabro económico, todavía no se vislumbraban medidas que afectaran seriamente los intereses de las clases privilegiadas, que apuntarían a mejorar sustancialmente las condiciones de los sectores empobrecidos o que iniciaran los cambios estructurales prometidos por la Revolución Bolivariana.

Durante esta misma etapa inicial del gobierno, se evidenciaron ciertas debilidades en el proceso que, a la postre, contribuirían a una disminución de su apoyo popular. En las sucesivas elecciones celebradas entre 1999 y 2000, se manifestó un mayor grado de polarización en la votación: mientras que se consolidaba el apoyo entre los sectores populares, ya se había iniciado un proceso de alejamiento de aquellos sectores de la clase media que inicialmente apoyaban al gobierno. Preocupaba la aparente incapacidad de transformar el partido oficialista, el MVR, en algo más que una maquinaria electoral que ya padecía de muchos de los vicios tan criticados en los partidos tradicionales. El mismo proceso que culminó en la sanción de la nueva constitución y la relegitimación de los poderes públicos suscitó dudas respecto a la voluntad del gobierno de promover aquellos aspectos de la nueva Constitución diseñados a encausar la dimensión participativa de la nueva institucionalidad.

Sin embargo, tal vez la más llamativa de las debilidades se puso de manifiesto en la política del gobierno y del MVR frente a los sindicatos. En octubre del año 2000 se produjo

un enfrentamiento entre la directiva de la empresa estatal del petróleo (PDVSA) y el sindicato Fedepetrol, que fue una primera muestra clara de la torpeza del gobierno frente a legítimos reclamos gremiales. El conflicto culminó con una derrota del gobierno y el nombramiento de un nuevo presidente de la empresa pero, además, permitió a un dirigente sindical de Acción Democrática (AD), Carlos Ortega, transformarse en abanderado de la defensa de los derechos sindicales frente a un gobierno tildado de autoritario y arbitrario.

Cuando, en diciembre de 2000, el gobierno promovió la renovación de las autoridades sindicales a través del mecanismo de un referéndum, confiaba en su capacidad de provocar el desplazamiento de aquella dirigencia tradicional dominada por AD que, según mostraban las encuestas, había llegado a niveles de deslegitimación parecidos a aquellos de los partidos tradicionales. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Se le facilitó a la oposición una recuperación de su influencia

en los sindicatos y una relegitimación de su liderazgo. El gobierno ganó el referéndum, pero el alto nivel de abstención reflejaba serios cuestionamientos a una iniciativa que muchos interpretaban como una amenaza a la autonomía sindical.

Además, durante el curso de la posterior campaña para la renovación de las autoridades sindicales, se evidenció el reducido peso del MVR entre los sindicalizados. En estas circunstancias, la negativa del partido de gobierno a buscar alianzas con aquellas fuerzas sindicales que desde hace años venían promoviendo una democratización de las estructuras sindicales, debilitó aún más al MVR, reforzando la percepción de que lo que buscaba era menos la democratización de los sindicatos que su subordinación al gobierno. Cuando finalmente se efectuaron las elecciones para la CTV en octubre de 2001, el gobierno prolongó su polémica con la dirigencia sindical, aduciendo serias irregularidades en el proceso (que, en efecto, existían) y negándose a reconocer la victoria de Ortega y la legitimidad de la nueva directiva. Esta confrontación con los nuevos dirigentes de la CTV evidentemente facilitó su incorporación a una estrategia política de la oposición dirigida a buscar la renuncia o el desplazamiento del Presidente.

La incorporación de la cúpula empresarial, representada por Fedecámaras, a la ofensiva política, también estuvo facilitada por una iniciativa del gobierno. En noviembre de 2001, el Ejecutivo aprobó 49 leyes mediante el recurso de la Ley Habilitante sancionada anteriormente por la Asamblea Nacional, sin propiciar un debate público con los dis-

“La manera indiscriminada en que se descalificaba a la oposición [abrió] frentes de conflicto en forma igualmente indiscriminada. Esto ayudó a unificar a la oposición, no en torno a un proyecto alternativo, sino tras la consigna ‘fuera Chávez’.”

tintos sectores afectados, lo que seguramente hubiera reducido la magnitud de los conflictos a posteriori. Aun cuando la mayoría de estas leyes no eran controversiales, varias eran claves para su proyecto, destacándose la Ley de Hidrocarburos, que constituía el marco para iniciar la reforma petrolera, y la Ley de Tierras. La protesta empresarial, iniciada por la Federación de Ganaderos en contra de la Ley de Tierras, rápidamente se extendió hasta llevar a Fedecámaras a una postura de duro enfrentamiento con el gobierno. Así, y sin que se vislumbrara una recuperación significativa de la influencia de los partidos de oposición, se produjeron las condiciones para que una alianza entre las organizaciones cupulares sindicales y empresariales se transformara en eje de una ofensiva política de la oposición.

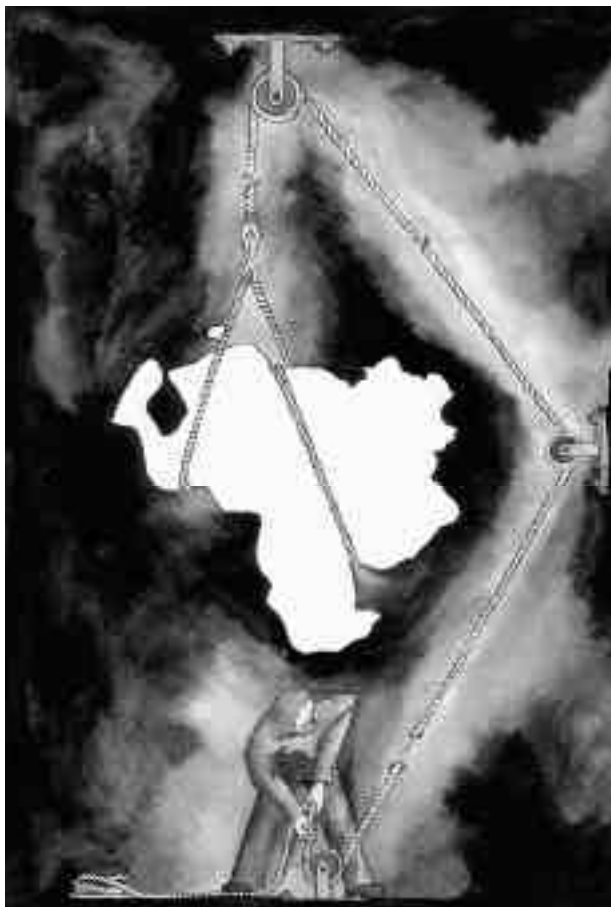
La ofensiva encabezada por la CTV y Fedecámaras, iniciada con el paro del 10 de diciembre de 2001, se produjo en un contexto marcado por los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Para el gobierno venezolano, eran dos las consecuencias más relevantes de ese acontecimiento: primero, un endurecimiento general de la política exterior de los Estados Unidos que inevitablemente se reflejaría en una postura menos tolerante frente al gobierno venezolano; y, segundo, la caída de los precios del petróleo por debajo del límite inferior de la banda que venía defendiendo la OPEP. El ejecutivo se vio obligado a revisar sus previsiones presupuestarias para el año 2002 y la oposición anticipaba que las dificultades económicas ya previstas (aun en caso de mantenerse precios estables en el mercado petrolero) se harían inmanejables. Se esperaba un sustancial déficit fiscal, una pérdida de control sobre las tasas de inflación y un apreciable deterioro de las condiciones de vida de los asalariados reflejado, a su vez, en una creciente conflictividad laboral y una erosión mayor de los niveles de apoyo popular al gobierno. En estas circunstancias, se anticipaba que una ofensiva de la oposición que orquestara organizaciones sindicales y empresariales, una clase media movilizada a través de las organizaciones de su "sociedad civil", los medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica y sectores desafectos al régimen dentro las fuerzas armadas, sería capaz de tumbar al gobierno.

De hecho, en el primer trimestre de 2002, los precios del petróleo se recuperaron y, a la altura del 11 de abril todavía no se había materializado la esperada crisis económica, ni tampoco la situación de grave conflictividad laboral que anticipaba la oposición. El enfrentamiento se había precipitado a consecuencia de otra iniciativa del gobierno: el nombramiento, en febrero, de una nueva directiva en PDVSA y la posterior aplicación del 'principio de autoridad' frente a las protestas de los cuadros gerenciales de la empresa. Sin embargo, más allá de la aparente torpeza del gobierno frente al conflicto en PDVSA, la precipitación de la crisis política parecía más bien consecuencia de una decisión

gubernamental de desafiar la ofensiva encabezada por la dirigencia sindical y empresarial. En enero se produjo la salida del Ministerio del Interior y del gabinete de Luis Miquelena, figura clave en cualquier intento de dialogar con la oposición. Al mismo tiempo, los nuevos nombramientos para los dos Ministerios claves para negociaciones con los empresarios y los sindicatos (de Industria y Comercio y de Trabajo) parecían indicar una falta de interés en el diálogo.

Como nuestro análisis se ha concentrado en el problema de la estrategia política del gobierno y los errores de conducción política, terminamos señalando cómo entendemos el carácter general de estos errores, apuntando así hacia las rectificaciones que parecieran necesarias, no simplemente como concesiones a la oposición, sino más bien como condiciones imprescindibles para aprovechar el fracaso del golpe y la posibilidad de un segundo aire para adelantar el proyecto.

Pareciera que el notable éxito de la ofensiva política desarrollada a partir de la victoria electoral de Chávez en 1998 hubiera llevado al presidente, al gobierno y al MVR a sobreestimar la fuerza real que se había conquistado a través de su amplio dominio de las instituciones públicas nacionales. Más allá de las contradicciones y errores puntuales que





inevitablemente surgen en un intento de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como el planteado, parece evidente que el lenguaje beligerante, pugnaz y muchas veces despectivo con que el presidente Chávez ha encarado una oposición caracterizada como “enemigo del proceso”, había contribuido a caldear los ánimos más allá de lo conveniente para que el proceso pudiera efectuarse dentro de los cauces de un mínimo de convivencia democrática. Pero el problema no era simplemente de forma o de estilo. La manera indiscriminada en que se descalificaba a la oposición tuvo como consecuencia que se abrieran frentes de conflicto en forma igualmente indiscriminada. Esto indudablemente ayudó a unificar a la oposición, no en torno a un proyecto alternativo, sino tras la consigna “fuera Chávez”.

Otro aspecto de este problema general de conducción política llevó al debilitamiento de la alianza que respaldaba al gobierno, hasta el punto de poner en peligro la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. En ocasión de la reelección de las instituciones representativas en julio de 2000 se rompió la alianza con el PPT (Patria Para Todos), dejando a este último partido sin representación parlamentaria. La posterior reconciliación entre el PPT y el gobierno no pudo remediar esta situación, de manera que, a nivel parlamentario, se acentuaba la importancia de la alianza con el MAS (Movimiento al Socialismo). Cuando a comienzos de 2001 los máximos dirigentes del MAS asumieron una postura de “apoyo crítico” al proceso, el gobierno intentó aprovechar la renovación de sus autoridades internas para desplazar a los dirigentes “críticos” por otros considerados más afines. El resultado fue una división del partido y el paso de la mayoría a la oposición. Por último, la radicalización de la postura del gobierno frente a la oposición, reflejada en la

salida de Luis Miquelena, llevó a la marginación del MVR de cuatro parlamentarios, abriendo así, por primera vez, la posibilidad de una pérdida de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.

Quienes venían preparando el golpe necesitaban unificar la oposición en torno a la exigencia de la renuncia de Chávez y, evidentemente, promovieron todas las acciones de calle que pudieran provocar una crisis de gobernabilidad. Pero la exacerbada polarización política que precedió al golpe no fue exclusivamente responsabilidad de la oposición, ni mucho menos una simple expresión de la conspiración. Fallas en la conducción política del gobierno facilitaron a los golpistas un piso político donde había muchos que no creían en una salida de fuerza. Afortunadamente, Chávez no llegó a renunciar y los golpistas rápidamente revelaron su vocación autoritaria, de manera que se pudo abortar el golpe. Ahora, el gobierno reconoce la necesidad de una rectificación. Nuestro análisis sugiere que la rectificación que urge no tiene por qué pasar por un abandono del proyecto; pero sí requiere de una conducción política más a la altura.

■ **Notas**

1 Para una discusión del proyecto, ver Parker, Dick 2001 “El chavismo: populismo radical y potencial revolucionario” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas), Vol. 7, N° 1, 13-44.

2 Juan Contreras, citado en Aznárez, Carlos 2000 *Los sueños de Bolívar en la Venezuela de hoy* (Nafarroa-Navarra: Editorial Txalaparte) 200.